

E

Editorial

Cultura de la deuda en el agua rural

El aumento de la morosidad y la evasión por parte de los usuarios asfixia a los comités, lo que amenaza la continuidad del servicio vital.

El acceso al agua potable en el mundo rural es el pilar fundamental para el desarrollo, la dignidad y la salud pública de miles de familias. Históricamente, el modelo chileno ha descansado en la organización comunitaria a través de los comités de Agua Potable Rural (APR), un sistema que funciona bajo la lógica de la autogestión y el compromiso mutuo. Sin embargo, esta red de cooperación hoy enfrenta una amenaza interna silenciosa pero devastadora: el aumento sostenido de la morosidad y la elusión de compromisos económicos por parte de los propios beneficiarios, una conducta que arrastra a los sistemas hacia una profunda incertidumbre financiera y operativa.

El núcleo del problema radica en una peligrosa distorsión cultural. Bajo el argumento de que el agua es un bien natural y, por ende, gratuito, un porcentaje creciente de usuarios ha dejado de abonar sus consumos. Se olvida, con preocupante ligereza, que si bien la fuente de origen es de la naturaleza, su captación, cloración, almacenamiento y distribución intradomiliar depende de una infraestructura industrial compleja. Mantener un APR implica administrar una microempresa que debe pagar mes a mes abultadas facturas de energía eléctrica a las empresas distribuidoras, financiar los sueldos del personal técnico y prever un fondo de reserva para contingencias tan costosas como el reemplazo de una bomba principal. Cuando el cincuenta por ciento de una comunidad, como ocurre de manera dramática en la Aldea Campesina de La Unión, decide restarse del financiamiento, el sistema simplemente se vuelve insostenible. Esta crisis se agrava por la presencia de soluciones habitacionales periféricas que saturan las redes diseñadas originalmente para un número acotado, triplicando la demanda sin que medie una inyección proporcional de recursos. A esto se suma el aprovechamiento de alternativas asistenciales, como el reparto gratuito en camiones aljibe municipales, mecanismo que desincentiva el cumplimiento de los deberes comunitarios. El resultado de esta indolencia es la asfixia de las cajas chicas de los comités, forzando a los dirigentes a evaluar medidas extremas como el corte de suministro para evitar la quiebra total. La autoridad comunal y las directivas de las APR deben actuar con firmeza frente a la "cultura de la deuda".